

sufrirá la pena de confiscación de bienes por la primera vez, y la de destierro perpetuo en caso de reincidencia.

2. Se encarga á todo ciudadano celoso del bien público, que denuncie inmediatamente al gobierno las infracciones del artículo anterior, las que siendo probadas, tendrá el denunciante derecho á la cuarta parte de los bienes confiscados.

3. Todo esclavo que denuncie al amo que ocultase, o prendiese á alguno que hubiese sido su criado, obtendrá su libertad luego que se justifique el hecho, estando en el caso del artículo 1.

4. El presidente del departamento de esta capital queda especialmente encargado de la ejecucion de este decreto.

Dado en el Palacio protectoral de Lima a 25 de Octubre de 1821.
San Martin.—Por orden de S.E.—B. Monteagudo. ⁽¹⁴⁵⁾

Población.

He acordado y decreto:

1º En ejecución de los decretos expedidos antes por el gobierno, y para dar a la administracion pública toda la regularidad que exigen los intereses generales, nombrarán sin demora los presidentes de los departamentos una comision de las personas que merezcan su mayor confianza, y cuyo número queda a su arbitrio, segun las circunstancias de cada departamento, para que en todo el mes de Marzo les presenten una razon estadistica de la poblacion, clasificada segun su ejercicio, calculando el numero de propietarios, artesanos y demas subdivisiones que admita cada departamento.

2º Se nombrará un oficial ingeniero que levante un plano topográfico de cada departamento, y proporcione igualmente a la comision los conocimientos que necesite para rectificar sus operaciones: los gastos que sea necesario hacer a este fin, serán costeados por los fondos de las respectivas municipalidades.

3º La comision presentará a los presidentes los planes de mejora que sean adaptables a beneficio de la agricultura, del comercio, industria é intruccion pública en su respectivo departamento.

4º Los presidentes examinarán los trabajos de aquella comision, y darán cuenta de su resultado al ministerio de Estado al fin de cada

(145) *Ibid.* Nº 32, 27 de octubre de 1821.

trimestre, añadiendo las observaciones que convengan para mejor conocimiento del gobierno.

5º A mas de la razon de las penas capitales impuestas en cada departamento que mensualmente se ha mandado dén los presidentes, añadirán otra de todas las causas civiles y criminales que se hayan sentenciado, ó estén pendientes en todo el departamento, con un brevísimo extracto, segun su estado.

6º Pasaran los presidentes al ministerio de la guerra un estado mensual de las fuerzas de linea, ó cuerpos de milicias que hayan en cada uno de ellos, con el alta y baja que hubiesen tenido.

7º También darán cuenta mensualmente al ministerio de hacienda de las entradas y salidas que hayan habido en las diferentes cajas del departamento, expresando su inversion, y proponiendo los arbitrios que consulten el aumento de las rentas públicas.

8º Circularán a los gobernadores de partido las instrucciones convenientes para metodizar el trabajo de que cada uno debe encargarse, y dar el mas puntual cumplimiento a lo que se previene en los artículos anteriores.

9º Los asesores de los departamentos quedan especialmente encargados, y serán responsables de la ejecucion de este decreto, siempre que los presidentes no puedan hacerlo por si, en fuerza de otras atenciones a que los llamen las combinaciones de la guerra.

10º Se nombrará inmediatamente un fiscal departamental que a mas de las funciones que le atribuye el artículo 7º del reglamento de 12 de Febrero de 1821 tenga el muy especial encargo de examinar todos los decretos que se han expedido, ó expidieren por el gobierno, reclamar la ejecución de los que no esten en observancia, velar sobre el cumplimiento de todos, y dar cuenta al fin de cada mes al ministerio de estado de las infracciones que notase, y medidas que hubiese adoptado, para la puntual observancia de cuanto se ordene, en cualquier ramo de la administración pública. Su sueldo será de dos mil pesos anuales.

11º La responsabilidad del fiscal departamental a este respecto, será tanto mas grave, cuanto es mas necesario hacer sensible las ventajas de un gobierno propio, que solo manda lo que conviene se ejecute, sin consultar extraños intereses: quedan por tanto sujetos los fiscales departamentales a una residencia especial que les será tomada por la alta camara en caso de infraccion. Circúlese a quienes

corresponde, é insértese en la gaceta oficial. Dado en el palacio protectoral de Lima a 15 de Enero de 1822.— 3º— Firmado *San Martin*.— Por orden de S. E.—B. Monteagudo. ⁽¹⁴⁶⁾

Minería.

Supresión del tribunal de minería y ereccion de una direccion jeneral de bancos en lugar de él.

Las minas son el patrimonio del Perú. Otros paises están destinados á la prosperidad de la agricultura por sus dilatadas llanuras y abundantes riegos, el Perú por sus grandes cordilleras á ser el depósito de los mas precios metales. La variedad y abundancia en oro y plata principalmente le hizo célebre desde su descubrimiento. Y cuando semejante riqueza exijía que el gobierno, y los particulares aplicaran el talento, y la industria para su mas arreglada explotación y beneficio, comenzó la incuria y abandono desde su mismo descubrimiento. Por lo que decia Alonso Barba que era mas la plata que se perdía que la que se utilizaba.

Al cabo de cerca de tres siglos pensó la corte de España en mejorar las labores de las minas, y beneficios de los metales de América, destinando á Méjico y al Perú expediciones de sabios mineralojistas, que con la luz de la fisica y quimica escudriñasen los senos oscuros de la tierra, y analizasen con la misma los metales que abrigan. Proyectaronse colejos de instruccion para la juventud que debía destinarse á tan noble ocupacion, y se erijieron tribunales para su proteccion y fomento. En verdad que en Méjico se caminó con acierto al fin, mas en el Perú no se consiguió otra cosa, que la destruccion de crecidos caudales, y un seminario de pleitos. El tribunal que debía tener por principal objeto el adelantamiento de las minas se convirtió en un establecimiento contencioso, en que careciendo los jueces de los conocimientos necesarios, fué preciso agregarles asesores, y jueces de alzadas, que consumiendo en sueldos cerca de veinte y dos mil pesos anuales, y teniendo que pagar mas de ocho mil pesos de reditos por los crecidos gravámenes con que fue cargando sus fondos, se ha encontrado al nacer la libertad del país en estado de fenecer por falta de subsistencia. No es posible que cuando el gobierno ha dirigido sus miras sobre todos los ramos del Perú para hacerlos prosperar, olvide las minas, el mas precioso de todos ellos. He meditado profundamente que lo que estas necesitan para

(146) Ibid. Nº 5, 16 de enero de 1822.